

Las estaciones secas del SIDA

Las hambrunas de estos últimos años ya no tienen casi nada que ver con los caprichos de la madre naturaleza. Las graves crisis alimentarias de diversos países africanos se han originado debido a la mala gestión, el déficit democrático, la persistencia de los conflictos armados, el desequilibrio en los intercambios comerciales y, sobre todo, la pandemia de VIH/SIDA.

Marie-Paule Dromeel
Periodista

Cuarenta y dos millones de personas se-cropositivas en el mundo, la mayoría de ellas en Africa, 40 millones amenazadas de hambre en ese mismo continente, 7 millones de trabajadores de la agricultura muertos de SIDA: los datos epidemiológicos del Programa Común de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) y los del Programa Alimentario Mundial (PAM) se entremezclan, porque el mapa del hambre en el mundo y el del VIH/SIDA tienden a superponerse. Africa austral es la región más gravemente afectada por el hambre. En esa región también se encuentran los índices de prevalencia del virus más elevados del mundo: 16 por ciento en Malawi, 21 por ciento en Zambia, 31 por ciento en Lesotho y 33 por ciento en Swazilandia y Zimbabwe¹.

Se está lejos de las imágenes de tierra calcinada y resquebrajada asociadas al hambre. Los países del Sahel y del Cuerno de Africa se ven una vez más afectados por la inseguridad alimentaria pero, en este caso, la mayor parte de la tarea de quienes desarrollan labores humanitarias se aboca a países que en principio no deberían tener ese problema porque cuentan con suficientes tierras fértiles. Es verdad que estos dos últimos años la sequía asoló duramente el Africa austral, pero eso ya había sucedido en 1992 sin haber provocado tanta escasez de alimentos. Si bien los caprichos del clima desencadenaron la crisis alimentaria, esta vez el factor determinante fue la propagación de la epide-

mia de VIH/SIDA hasta alcanzar niveles que hace algunos años se consideraban imposibles.

Un círculo vicioso

Los vínculos entre el VIH/SIDA y la inseguridad alimentaria ya han quedado establecidos desde hace tiempo. En un primer momento, el virus debilita las economías esencialmente rurales y agrícolas de esos países. Luego, al crecer la pobreza y la inseguridad alimentaria, aumenta la vulnerabilidad de las poblaciones rurales al VIH/SIDA. En una familia, el ciclo infernal comienza cuando se contamina el primer adulto, que muchas veces es el padre. Debido a que lo tiene que cuidar, la mujer ya no puede trabajar en el campo. El presupuesto familiar se ve seriamente mermado por los gastos médicos. Cuando el hombre muere, los gastos de los funerales pueden obligar a la esposa a tener que vender una parte de sus bienes. La tradición en materia de duelo prohíbe trabajar en el campo durante varios días. Al año siguiente, incapaz de tomar a una persona ni siquiera por un tiempo, la familia siembra un área menor. Los niños ya no van a la escuela y tienen que remover la tierra y cosechar. La producción disminuye. Al tener menos reservas alimentarias y no disponer de dinero para comprar ni carne ni pescado, la familia padece de desnutrición y otros problemas de salud.

Cuando a su vez la madre o los niños se enferman, el ciclo se repite y se agrava.

Cuando a comienzos de 2003 se firmó un acuerdo de cooperación con el PAM, Peter Piot, director de ONUSIDA, describió cómo continúa ese proceso: «Las personas se ven obligadas a adoptar estrategias de supervivencia que pueden poner en riesgo sus vidas. Algunas emigran, a menudo hacia barrios marginales donde no hay servicios de salud ni de educación; las mujeres y los niños pueden verse obligados a prostituirse a cambio de la comida, de trabajo o de otras cosas esenciales...»

La repercusión del «trío mortal» – inseguridad alimentaria, VIH/SIDA, capacidad reducida de brindar y administrar los servicios básicos –, denunciada por el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, ante el G8 en marzo de 2003, se puede mensurar. En Swazilandia, donde la esperanza de vida descendió para pasar a situarse en menos de 40 años, un reciente estudio revela que en el 38 por ciento de las familias en las que se produjo una muerte por SIDA hubo una merma de sus cosechas y se sacó a los hijos de la escuela porque ya no se podían pagar los gastos de escolaridad. La producción media de maíz por familia y por año decayó de 35 a 16 bolsas. Una explotación que aún no se haya visto afectada por el fallecimiento de uno de sus miembros tiene como promedio 13 cabezas de ganado, que son 9 en las familias donde el SIDA ha ocasionado alguna muerte. Según otro estudio, en una zona rural de Zimbabwe, donde el 50 por ciento de las muertes son atribuibles al SIDA, la producción de maíz disminuyó un 61 por ciento y la de verduras, el 49 por ciento.

Más que una «crisis» relacionada con un fenómeno climático, la inseguridad alimentaria se ha convertido en Africa en una especie de catástrofe permanente. En diciembre de 2002, Zimbabwe tenía 7,2 millones de personas que necesitaban ayuda urgente, según el sistema de vigilancia mundial instaurado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO. Ese país, ex «granero de cereales» de la región, tiene una situación ejemplar al respecto. La de-

sastrosa reforma agraria que emprendió hace tres años el Presidente Mugabe está desmantelando de manera brutal un sistema agrícola que, si bien se fundamentaba en una injusta distribución de las tierras, tenía por lo menos el mérito de funcionar. En el plano social, la Asociación de Agricultores de Zimbabwe, la Commercial Farmers' Union, que agrupa a 3.400 propietarios de grandes explotaciones que tienen buenas tierras y a quienes apunta la reforma, había instaurado uno de los programas de lucha contra el VIH/SIDA más activos del país: 10.000 voluntarios fueron movilizados para desarrollar actividades de prevención destinadas a los dos millones de personas que viven en esas grandes explotaciones. La eficacia de ese programa había mejorado las relaciones entre los empleadores y los obreros agrícolas, pero con las ocupaciones de tierras, la violencia y el éxodo de más de medio millón de personas corre serio peligro la continuación de esas actividades que, en alguna medida, compensaban la incapacidad del Estado de proteger a su población. Hoy en día, en Zimbabwe no funcionan ni siquiera los enlaces estatales de ayuda humanitaria o están en manos de la corrupción. El PAM, alertado por revelaciones que se hicieron en la prensa, tuvo entonces que decidirse a suspender ciertas operaciones porque el partido gobernante, el ZANU-PF, malversaba la ayuda en provecho de sus partidarios.

Abril es generalmente período de cosecha en la región, y por ese motivo, a comienzos de abril de 2003 se disminuyó la ayuda alimentaria. Sin embargo, el 7 de ese mismo mes, James Morris, secretario ejecutivo del PAM y enviado especial del Secretario General de las Naciones Unidas para las necesidades humanitarias de Africa austral, advirtió al Consejo de Seguridad que «sería una locura creer que la crisis está superada. Las previsiones para las cosechas son mejores, pero se pueden prever otras sequías y nos vemos confrontados a la real posibilidad de una crisis alimentaria de baja intensidad, pero permanente y provocada por el SIDA».

Algunas semanas más tarde, en un informe de la Comunidad de Desarrollo de

Africa Austral (SADC) se detallaban fríamente algunas posibles respuestas a este riesgo de penuria permanente, entre las cuales figuraba continuar con los operativos de asistencia alimentaria, la atención que se debe prestar al declive de la cantidad y la calidad del trabajo en las zonas de alta prevalencia de VIH/SIDA y la adaptación del trabajo «de manera que el mismo sea acorde con la capacidad de adultos que no gozan de excelente salud y de personas de edad». El pesimismo de ese documento, que concluía además aludiendo a «las previsiones de crecimiento exponencial de la enfermedad durante los 10 a 12 años venideros», en cierta manera se hacía eco de una nota que la Comisión Europea consagró en diciembre a la crisis humanitaria de Africa austral. En Bruselas se considera que la misma se debe principalmente «a los fracasos económicos de los gobiernos, vinculados con políticas inadecuadas que inciden en los sectores de la seguridad alimentaria, del desarrollo rural y de la adquisición de tierras, pero también al agotamiento de los mecanismos tradicionales de adaptación, a la desnutrición crónica y a que hay insuficientes inversiones privadas», y, asimismo, «a la debilidad de las instituciones regionales, principalmente la SADC, que no tuvieron la participación debida en cuanto a anticipar y prevenir la crisis».

Reformas económicas inadecuadas

Ni una palabra se dice en esa nota de la UE sobre las toneladas de excedentes que ésta vuelca en los mercados del Sur, ni tampoco sobre los 400.000 millones en subvenciones que los países occidentales acordaron en 2001 a sus agricultores. Las reformas económicas que preconizan las instituciones financieras internacionales a veces resultaron ser totalmente inadecuadas, contribuyendo a debilitar a los países pobres. Con los planes de ajuste estructural, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial inspiraron reformas agrarias que, lejos de mejorar la seguridad alimentaria, a veces hicieron que

las poblaciones de esos países se precipitaran a una mayor precariedad, tanto más rápidamente cuanto que esas economías son esencialmente agrarias. La liberalización del sector agrícola se tradujo principalmente en la reducción o en la supresión de distintas formas de asistencia a los campesinos, como los subsidios para la compra de insumos. En Malawi, la reducción de un programa muy eficiente de distribución gratuita de semillas y de abono contribuyó a que se derrumbara la producción alimentaria. Marcadas por la incompreensión, el dirigismo y las sospechas, las difíciles relaciones entre los tecnócratas del FMI y las autoridades de esos países a veces tienen consecuencias muy graves. Eso fue precisamente lo que ocurrió en Malawi, donde desde hace un año las autoridades y el FMI se echan mutuamente la culpa del hambre, vinculado a la venta por parte del Gobierno de sus reservas de cereales unos meses antes de las malas cosechas. El FMI preconizaba la venta de una gran parte de esas reservas y el Gobierno se decidió a vender todo cuando el precio estaba muy bajo, operación que además estuvo signada por malversaciones de dinero. En cuanto al PAM, en abril de 2003 puntualizaba que se continuaría entregando ayuda alimentaria para más de tres millones de personas a fin de evitar que los campesinos, acosados por el hambre y la falta de ingresos, cosecharan demasiado pronto productos que todavía no estuvieran maduros. El PAM predijo asimismo que, con el 60 por ciento de la población de Malawi viviendo por debajo del umbral de pobreza y un índice de prevalencia del VIH/SIDA del 16 por ciento, la mayoría de las familias más pobres y vulnerables no podrían comprarse los alimentos aunque los hubiera. En ese país, la esperanza de vida pasó de 46 a 36 años.

A menudo se desconoce que hay más pobladores rurales que centros urbanos infectados por el VIH/SIDA y que la epidemia se propaga en el campo a una velocidad espeluznante, a lo largo de los ejes de comunicación y debido a las costumbres migratorias. Un mercado agrícola que

atrae la presencia de campesinos y clientes es una «zona de riesgo», como así también las plantaciones, donde a veces viven muchos obreros agrícolas solteros o migrantes en condiciones similares a las que tenían los mineros de África austral. En el pasado, grandes proyectos que atrajeron a miles de trabajadores y propiciaron el comercio del sexo sirvieron como vector de la epidemia. Eso explica, por ejemplo, que la gigantesca obra del oleoducto entre Chad y Camerún atraiga toda la atención del Banco Mundial, que lo financia.

El tributo rural

El mundo campesino y las mujeres en particular pagan un muy pesado tributo. En muchas comunidades rurales, gran cantidad de hombres partió a probar suerte en la ciudad. Algunos vuelven con el VIH/SIDA en la sangre y corren el riesgo de contagiar a sus familiares. Los migrantes enfermos tienden también a querer terminar sus días en sus aldeas. Razones biológicas y culturales hacen que las mujeres y las chicas sean más vulnerables al VIH/SIDA que los hombres y los muchachos, pero cuando se infectan, en general, sobreviven más tiempo. Todo eso explica por qué hay tantas «viudas del SIDA». No obstante, la muerte del marido implica, asimismo, que en ciertas comunidades rurales se lleven a cabo rituales que pueden constituir un peligro de propagación del virus. Tal es el caso del levirato, es decir, la obligación moral de que una viuda se case con el hermano menor de su marido fallecido, práctica que todavía perdura en diversas regiones de África. En otras sociedades, al morir el marido, las viudas pierden todos sus derechos a la tierra y a la propiedad. Incluso a veces sus familias políticas las echan, aunque en este caso no se trata de una costumbre funeraria. En todo el mundo, diversas asociaciones de mujeres intentan hacerse escuchar para que se lleven a cabo reformas agrarias que acaben con todas las discriminaciones que sufren. La principal injusticia: mientras que buena parte del trabajo agrícola corre por

cuenta de las mujeres, éstas no tienen más que una ínfima parte de los derechos de propiedad. Poco a poco, esta cuestión de desigualdad está saliendo a la luz, precisamente porque se ha hecho evidente que el VIH/SIDA hace aún más frágil la posición de las mujeres en la comunidad.

A escala local, esta toma de conciencia constituye un gran desafío, dado el limitado acceso a la información y a la educación. Pero no hay que olvidar a las otras grandes víctimas de la pandemia: los niños. En el mundo rural, las escuelas a menudo están situadas en lugares apartados y los programas están poco adaptados a las necesidades de los niños. Resultan determinantes las campañas de movilización en el sector educativo como la que emprendió la Internacional de la Educación (IE) en colaboración con el UNICEF y el Banco Mundial. La IE procura desde hace varios años difundir el máximo posible de información sobre el VIH/SIDA a través de las estructuras sindicales regionales, nacionales y luego locales, información destinada a los docentes (en ciertas escuelas de Zambia, el índice de seropositividad del personal docente alcanza el 40 por ciento) y a los alumnos. En Haití, por ejemplo, uno de los países que la IE tomó como blanco, la organización afiliada – la Coordinadora Nacional de Docentes de Haití – es una de las organizaciones mejor estructuradas, no solamente entre los sindicatos locales sino también en el seno de la sociedad civil. Hoy en día, los módulos de formación llegan hasta las regiones más olvidadas y pobres, hasta las escuelas donde todavía no se había abordado nunca el tema del VIH/SIDA. Otro proyecto promotor que respaldan diversas organizaciones internacionales consiste en suministrar una comida gratuita en la escuela, lo que podría hacer que se redujera muchísimo el abandono escolar de los niños pobres, como sucede en el caso de muchos varones y niñas que se ven obligados a suplantar la ausencia en la granja de un miembro de la familia enfermo o muerto de SIDA, o a quienes se saca de la escuela porque ya no se puede hacer nada cuando ha comenzado a actuar el *trío mortal*: SIDA, pobreza

y penuria alimentaria. Como dice James Morris, uno de los más fervientes defensores de ese proyecto, para el cual todavía falta encontrar donantes de fondos, «lo primero que reclaman las familias afectadas por el SIDA no es dinero ni medicamentos, sino comida».

Nota

¹ Con la excepción de Botswana (38 por ciento de prevalencia) y de Sudáfrica (20 por ciento), cuyas riquezas mineras los preservan de la inseguridad alimentaria. Los porcentajes se refieren a los índices de prevalencia entre los adultos (estimaciones de ONUSIDA de finales de 2002).
